

59.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

- a) En los procedimientos iniciados de oficio solamente.
- b) En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada solamente.
- c) En los procedimientos iniciados por quien ostenta un interés legítimo solamente.
- d) En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.

60.- En relación con los actos administrativos producidos por silencio administrativo ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- a) Sólo se podrán hacer valer ante la Administración que no resolvió.
- b) Se podrán hacer valer ante cualquier Administración, pero no ante una persona, física o jurídica, privada.
- c) Su existencia debe ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
- d) Su existencia sólo puede acreditarse mediante el certificado acreditativo del silencio producido que emita el órgano competente para resolver.

61.- Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa:

- a) Se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite.
- b) Se tendrá por efectuado el trámite sólo si quien lo rechaza es el propio interesado.
- c) En ningún caso se tendrá por efectuado el trámite, siendo necesario que se practique un segundo y último intento de notificación.
- d) Se tendrá por efectuado el trámite previa comunicación al interesado del acto por correo ordinario.

62.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se podrá practicar utilizando medios electrónicos:

- a) Sólo en aquéllos procedimientos en los que el ciudadano posea un certificado de firma electrónica expedido por la autoridad competente.
- ☒ b) Cuando el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente.
- c) Cuando la Administración conozca la dirección de correo electrónico del interesado.
- d) Cuando el interesado se haya dirigido a la Administración utilizando dicho medio de comunicación.

63.- La Administración podrá convalidar los actos administrativos subsanando los vicios de que adolezcan:

- a) Sólo si se trata de actos nulos de pleno derecho.
- b) Sólo y exclusivamente cuando se trate de actos anulables y el vicio consista en la falta de alguna autorización.
- c) Sólo y exclusivamente cuando se trate de actos anulables y el vicio consista en incompetencia no determinante de nulidad.
- d) Sólo si se trata de actos anulables.

64.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un acto administrativo nulo o anulable que contenga elementos constitutivos de otro distinto producirá los efectos de éste:

- ☒ a) Sólo si así lo acuerda el órgano administrativo competente para resolver el correspondiente recurso administrativo.
- b) En ningún caso.
- c) Sólo si así lo acuerda el órgano administrativo que lo dictó.
- d) En todo caso.

65.- Un acto administrativo en virtud del cuál se ordena la demolición de un bien inmueble inexistente:

- a) Es nulo de pleno derecho.
- b) Es plenamente válido, al no contener ninguna de las causas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que determine su nulidad o su anulabilidad.
- c) Es anulable.
- d) Contiene una simple irregularidad, que en ningún caso determina su nulidad o su anulabilidad.


66.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si fuesen varios los medios de ejecución admisibles de un acto administrativo:

- a) Se elegirá el menos restrictivo para la libertad individual.
- b) Se elegirá el más económico para la Administración.
- c) Se elegirá el más rápido y flexible.
- d) Se elegirá el que decida el propio interesado.

67.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas pueden imponer multas coercitivas para la ejecución de determinados actos, cuando así lo autoricen:

- a) Las leyes, los reglamentos y las sentencias judiciales.
- b) Los distintos ordenamientos jurídicos de las Comunidades Autónomas.
- c) Las leyes.
- d) Los Ministros, o en su caso los Consejeros de las distintas Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.



68.- En un procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y no vinculantes.
- b) Preceptivos y vinculantes.
- c) Facultativos y no vinculantes. 
- d) Facultativos y vinculantes.


69.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán acumularse los procedimientos administrativos que guarden identidad sustancial o íntima conexión:

- a) Por acuerdo del órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.
- b) Por acuerdo del interesado que instó el inicio de uno de los procedimientos.
- c) Siempre que todos los procedimientos en cuestión hayan sido iniciados de oficio.
- d) Siempre que todos los procedimientos en cuestión hayan sido iniciados a instancia de persona interesada.


70.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la caducidad del procedimiento administrativo en los iniciados a solicitud de interesado:

- a) No tendrá lugar en ningún caso.
- b)  Se producirá a los tres meses de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado.
- c)  Se producirá a los seis meses de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado.
- d) Se producirá al mes siguiente a la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado.


71.- La declaración de nulidad por parte de las Administraciones Públicas de los actos nulos de pleno derecho previstos en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- 
- a) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
 - b) Exigirá dictamen previo, favorable o no, del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
 - c) En ningún caso podrán establecer, en la misma resolución, indemnizaciones a favor de los interesados.
 - d) Podrá adoptarse en cualquier momento.


72.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

- 
- a) Siempre que no supongan un perjuicio para los interesados.
 - b) En cualquier momento, siempre que no haya recaído resolución definitiva.
 - ☒ c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
 - d) Siempre que no hayan transcurrido tres meses desde que se dictó el acto.

73.- El plazo para interponer recurso extraordinario de revisión contra los actos administrativos cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente:

- 
- a) Será de tres meses desde la fecha de la notificación del acto impugnado.
 - b) No está sujeto a límite temporal alguno.
 - c) Será de cuatro años desde la fecha de la notificación del acto impugnado.
 - d) Será de tres meses desde que el interesado hubiera tenido conocimiento del error de hecho en que basa el recurso.

74.- En relación con el recurso administrativo potestativo de reposición ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- 
- a) Es un recurso preceptivo para impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
 - ☒ b) El plazo para su interposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
 - c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
 - d) Contra la resolución de un recurso de reposición será posible interponer de nuevo dicho recurso.

75.- Según la Ley 8/2006, de 20 diciembre, de Castilla- La Mancha que establece el régimen jurídico aplicable a las Resoluciones Administrativas en determinadas materias, la resolución de los procedimientos simplificados para el ejercicio de la potestad sancionadora deberá notificarse:

- a) En el plazo máximo de tres meses desde su iniciación.
- b) En el plazo máximo de un mes desde su iniciación.
- c) En el plazo máximo de un año desde su iniciación.
- d) Sin que exista plazo alguno para ello.

76.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida:

- a) Por disposición judicial.
- b) Por el titular del Ministerio para las Administraciones Públicas.
- c) Por el titular de la Consejería de Administraciones Públicas, en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
- d) Por disposición de rango legal o reglamentario.


77.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que el daño alegado sea:

- a) Efectivo y por un importe superior a 600 euros.
- b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- c) Efectivo e individualizado o individualizable con relación a una persona o grupo de personas.
- d) Efectivo y por un importe superior a 100 euros.


78.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán:

- a) Siempre de oficio.
- b) Siempre por reclamación de los particulares.
- c) Siempre por orden superior del órgano competente para acordar la iniciación del procedimiento.
- d) De oficio o por reclamación de los interesados.


79.- Cuando la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a que se refiere la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se derive de la gestión conjunta de varias Administraciones Públicas:

- 
- a) Las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria.
 - b) Las Administraciones intervinientes responderán de forma mancomunada.
 - c) Las Administraciones intervinientes responderán de forma individualizada ante los particulares.
 - d) Sólo una de las Administraciones intervinientes responderá ante los particulares.


80.- ¿Qué tipo de contrato administrativo es un contrato celebrado por una Administración Pública que tiene por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de éstos últimos?

- 
- a) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
 - b) Contrato de suministro.
 - c) Contrato de servicios.
 - d) Contrato privado.

81.- Según la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros se requiere, entre otras:

- 
- a) Que la cesión se publique en el BOE o en el Boletín Oficial de la Provincia.
 - b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 50 por ciento del importe del contrato.
 - c) Que lo autorice, en todo caso, el Consejo de Ministros.
 - d) Que la cesión entre el adjudicatario y el cesionario se formalice en escritura pública.

82.- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de:

- 
- a) Quince días naturales desde la notificación de la adjudicación provisional.
 - b) Un mes desde la notificación de la adjudicación definitiva.
 - c) Quince días desde que se constituya la fianza definitiva.
 - d) Diez días hábiles desde la notificación de la adjudicación definitiva.